

SEÑOR:  
JUEZ ADMINISTRATIVO DE CALI (REPARTO)  
CALI - VALLE  
E.S.D.

REFERENCIA: DEMANDA MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA  
DEMANDANTES: MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, DIANE GIRALDO.  
DEMANDADOS: LA NACIÓN- FISCALIA GENERAL DE LA NACION- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINSTRACION DE JUSTICIA – DIRECCION DE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

GUSTAVO ADOLFO GIL SANCHEZ, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Ibagué, identificado como aparezco al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderado especial de la Señoras MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, y DIANE GIRALDO , según mandato adjunto, en ejercicio del Medio de Control de reparación directa que consagra el artículo 140 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), comedidamente llego ante este despacho, con el fin de solicitarle que, con citación y audiencia del señor agente del ministerio público ante esa Corporación y de la Nación-FISCALIA GENERAL DE LA NACION, representada legalmente por el doctor EDUARDO MONTEALEGRE LYNETH, y por la DIRECTORA EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL Dra. CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ o por quienes los reemplace o hagan sus veces, en sentencia de mérito, se pronuncien las siguientes:

### DECLARACIONES Y CONDENAS

1).- Que se declare RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE a LA NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION y la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA SECCIONAL VALLE por la privación injusta de la libertad a que fueron sometidas MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO quienes permanecieron detenida en Centros Carcelario de mujeres en la ciudad de Tuluá Valle, y Buga Valle, por espacio de 3 meses y 6 días, y 51 días respectivamente.

2).- Condenar, en consecuencia, LA NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION y la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO -, a título de reparación directa, a pagar a mis poderdantes, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, que les fueron causados con la falla de administración de justicia, los cuales se estiman como mínimo en la suma de de \$ 69.203.500,00 Mcte. (SESENTAY NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS), o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica.

3.). Se ordene a los demandados FISCALIA GENERAL DE LA NACION y a la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO, realizar una ceremonia audiencia que se celebre frente a la misma comunidad del sector donde vivían al momento de los hechos de captura, en donde se retracten del agravio injustificado a que fueron sometidas las señoras MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, haciendo énfasis en la violación del derecho a la dignidad, a la libertad personal y a la honra, que se les causo a mis poderdantes de manera arbitraria.

4.). La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el Inciso 4 del artículo 187 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

5.). La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 192 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011)

## HECHOS Y OMISIONES

Constituyen elementos facticos principales de las pretensiones formuladas los que a continuación se describen y explican de acuerdo a lo manifestado por mi representado.

1. Con fecha 27 de marzo del 2013 la Fiscalía practicó diligencia de allanamiento y registro a la vivienda sin nomenclatura FIJADA EN LA FACHADA DE LA CASA ubicada en medio de dos casas con direcciones: 14 – 91 y 14 – 103 del Barrio La paz del Municipio de Riofrio, en donde residen MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, abuela y nieta respectivamente, realizándose la captura de las citadas ciudadanas, ambas mayores de edad.
2. En una habitación de la residencia de su propiedad donde se encontraban MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA Y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, se incautó por parte de la Fiscalía 8 cartuchos de escopeta calibre 12 y 6 cartuchos para revolver calibre 38.
3. La Fiscalía en cabeza de la Fiscal 15 Seccional URI, la Dra. LUZ MARINA ARBOLEDA, , solicitó en audiencia concentrada la **LEGALIZACIÓN DE ORDEN Y PROCEDIMIENTO DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO, INCAUTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CAPTURA EN FLAGRANCIA**, así mismo **FORMULÓ LA CORRESPONDIENTE IMPUTACIÓN** a MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA y a ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, como presuntas coautoras del delito de FABRICACION TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICION DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CONCURSO POR PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO O MUNICION DE USO PERSONAL, artículos 365 y 366 del código penal., según el radicado en el centro de servicios judiciales SPOA 76834600018720130125, y finalmente en la citada audiencia solicitó **MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO**.
4. EL JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE, en cabeza del Dr. JAIME DAVID ASTAIZA ZAMBRANO, ante las peticiones hechas por la citada Fiscalía, accedió a las solicitudes, decretando legal la imputación y así mismo impone la **MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO** para MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO.
5. Con fecha 28 de marzo del 2013, El JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS TULUA VALLE mediante ORDENES DE ENCARCELACION N° 047 y 048 oficia al Director de la Cárcel Local de Tulua Valle, para que se sirviera mantener en calidad de detenidas a las señoras MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, por los presuntos delitos que imputó la Fiscalía 15 Seccional de URI de Tulua Valle.
6. Con fecha 1 de Abril de 2013, mediante oficio No. 1507 firmado por Dr. JAIME DAVID ASTAIZA ZAMBRANO, como JUEZ COORDINADOR, en contestación a la petición de mi poderdante, y encontrado con el radicado

SPOA 768346000187201301215, con radicación interna N° 2013-0262, **(recibido el 3 de abril de 2013)** este mismo le pone en conocimiento que el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE GUADALAJARA DE BUGA determinó la preclusión al proceso penal que se inició en contra de las señoras MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO.

7. La señora MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA es una **persona discapacitada física quien manifestó que sufrió meningitis en su infancia lo que le origina retardo en sus piernas y brazos, y con la privación injusta de la libertad a que fue sometida sufrió de manera significativa para poder suplir sus necesidades básicas.**
8. La señora MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA laboraba como persona independiente en actividades de servicios varios con lo cual consigue un salario mínimo como prestación.
9. Durante su permanencia en el centro carcelario la señora MARIA RUTH GIRALDO, convulsionó en cinco ocasiones, debido a su enfermedad y al hacersele difícil el acceso al medicamento EPAMIN (FENITOINA), razón por la cual tuvo que ser asistida en la enfermería del citado centro.
10. En total la señora MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, estuvo privada de la libertad por un periodo de 3 meses y 6 días (27 de marzo 2013, hasta 04 de julio de 2013)
11. La señora ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO estuvo privada de la libertad por un tiempo de 51 días (27 de marzo 2013, hasta 17 de mayo 2013).
12. Durante la privación de la libertad de las afectadas, la señora DIANE GIRALDO las estuvo visitando en el centro carcelario viendo los sufrimientos y vicisitudes a que eran sometidas de manera injusta tanto su madre como su hija.
13. Durante el tiempo de permanencia en el mismo centro de reclusión la señora MARIA RUTH sufrió varios episodios de ATAQUES EPILEPTICOS, que fueron desencadenados por el estrés permanente y por la imposibilidad de tomar el medicamento EPAMIN, que no fue posible ingresarlo a la cárcel respectiva.
14. Con fecha 24 de junio de 2015, la Procuraduría Administrativa 60 de Cali Valle, celebró audiencia de Conciliación, la cual se consideró como fallida, según acta adelantada por ese despacho.

## **OMISIONES**

Con comportamientos abusivos y de desconocimiento de garantías procesales y constitucionales los funcionarios del estado (LA FISCAL 15 SECCIONAL URI DE TULUA, LA DRA. LUZ MARINA ARBOLEDA, EL JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE, en cabeza del Dr. JAIME DAVID ASTAIZA ZAMBRANO) - omitieron respetar los derechos (PRESUNCION DE INOCENCIA, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, entre otros), que le asistían, y consecuentemente afectaron de manera significativa los intereses de las señoras MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA Y ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, toda vez que se visibilizan así:

Con la privación injusta de la libertad a mi poderdante en donde participaron tanto la LA FISCAL 15 SECCIONAL URI DE TULUA, LA DRA. LUZ MARINA ARBOLEDA, (desde el escrito de acusación, la solicitud de privación de la libertad, hasta la audiencia de PRECLUSION), donde las acusaban de los delitos de FABRICACION TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICION DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CONCURSO POR PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO O MUNICION DE USO PERSONAL, artículos 365 y 366 del código penal en calidad de coautor responsable), como también el JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE, en cabeza del Dr. JAIME DAVID ASTAIZA ZAMBRANO, (con la legalización de las **CAPTURAS**) se le causaron enormes

daños, tanto a las directas afectadas con estas medidas restrictivas de su libertad, como a la señora DIANE GIRALDO, quien figura como hija de MARIA RUTH, y al mismo tiempo madre de la joven ERIKA DANIELA, los cuales deben ser reparados, pues como consecuencia el buen nombre y la dignidad personal de cada demandante se le afectaron desde el mismo momento en que fueron sacadas de su residencia, para posteriormente ser recluidas en el centro carcelario de la ciudad de Tulua .

## FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Al realizarse un estudio sobre **RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO** por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas, coincido con la misma posición adoptada por la Procuraduría General, cuando en esta materia se ha pronunciado sobre el tema, rescatando los elementos estructurales, en concordancia con la jurisprudencia del consejo de estado, para lo cual me permito transcribir lo siguiente:

(REF.: Concepto 12-05; de la PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO; de fecha 13 de enero de 2012; **Expediente:** 130012331000-2003-00962- 01(40.767) Doctora **RUTH STELLA CORREA PALACIO**; Consejera Ponente Sección Tercera – Subsección B del CONSEJO DE ESTADO).

*“El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

*Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.*

*Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.*

*Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño.*

*A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución de 1991: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado.*

*Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.”*

**DERECHOS FUNDAMENTALES**-Libertad personal y presunción de inocencia

*Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal<sup>1</sup> y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*

---

<sup>1</sup>

## **PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna en injusta**

*Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado.*

## **PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad Patrimonial del Estado**

*Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.*

*De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos.*

*El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha señalado los siguientes supuestos que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad del Estado en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos también ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.*

*Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento de detención preventiva, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico.*

## **RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Elementos que la configuran**

### **PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Carga a la cual no está obligada a soportar/DAÑO ANTIJURÍDICO-Generado por la Fiscalía General de la Nación**

*Así pues, la detención que sufrió el sindicato, deviene en injusta, pues pese a no tener relación alguna con la autoría del hecho punible que se le imputó dado que su conducta no configuraba el delito que se le endilgaba, se le impuso una carga que no estaba obligado a soportar, como fuera el tener que permanecer detenido por espacio de 5 meses y 14 días, con los consecuentes perjuicios que dicha circunstancia les acarreó tanto a él como a los demás demandantes.*

*Finalmente, al estar determinada lo injusta que fue la privación de la libertad de que fue objeto el sindicato y encontrarse que existe nexo causal entre la actividad desplegada por la Fiscalía General de la Nación y el perjuicio causado a los demandantes, cual fue la detención por espacio de 5 meses y 14 días del sindicato; ha de concluirse que el ente demandado en su accionar causó un daño y que éste resultó antijurídico, de donde surge la obligación de indemnizar a la luz de la cláusula general de responsabilidad plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política".*

## **ANALISIS DE ESTE APODERADO**

**PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD.** Teniendo en cuenta los procederes que se realizaron en contra de mis poderdantes MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA y su nieta ERIKA DANIELA, con el proceso que adelantó la Fiscalía 15 Seccional URI, de Tulua, y la posterior legalizacion de captura del Juzgado 2 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tulua, que determino se efectuara la DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, se le causaron afectación a diversos bienes, derechos e intereses legítimos padecidos por mis poderdantes que no estaban obligadas a soportar porque el ordenamiento jurídico no se lo impone, así pues, se tiene que ahora bien, tratándose del régimen de responsabilidad patrimonial - extracontractual del Estado, derivado de la administración de justicia, es necesario reiterar el contenido de la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado que en decisión de la **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH. Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-26-000-1998-01785-01(18902), donde entró a determinar la RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD.**

“El criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad -aún en aquellos casos en los que se analiza la absolución de una persona penalmente encartada por aplicación del principio in dubio pro reo, es que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error, y en la que la administración de justicia podrá exonerarse sólo si demuestra que existió culpa exclusiva de la víctima. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano. (...) Como en el caso que se analiza se trató de una imputación penal al señor Juan Alberto Caicedo que culminó con sentencia absolutoria en su favor, y teniendo en cuenta que la entidad demandada se abstuvo de demostrar que la privación de la libertad del demandante hubiera ocurrido como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, entonces la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos como para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la entidad demandada, en la medida en que la privación de la libertad del demandante fue una carga que éste no estaba llamado a soportar”-

### **ANEXOS:**

Me permito acompañar los siguientes documentos:

- 1) Poderes legalmente conferido por los demandantes para actuar.
- 2) Registros civiles de nacimiento de MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, ERIKA DANIELA LOPEZ GIRALDO, DIANE GIRALDO
- 3) Derecho de petición de MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA dirigido a CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE TULUA, con fecha de recibido 3 de abril 2014.
- 4) Derecho de petición de MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA dirigido a DIRECTOR CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULUA, con fecha de recibido 2 de abril 2014.
- 5) Derecho de petición de MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA dirigido al Juez Primero Penal del Circuito especializado de Buga.

- 6) Oficio No. 1370 firmado por el señor GONZALO RIVERA DUQUE, Director del Establecimiento Penitenciario de mediana Seguridad y Carcelario de Tulua.
- 7). Derecho de petición dirigido al Juzgado Primero Especializado de Buga, donde se solicitó antecedentes de PRECLUSION DE INVESTIGACION en favor de mis poderdantes donde se determina la fecha de ejecutoria de esa decisión.
- 8) Antecedentes de SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR de la fiscalía con radicado SPOA 768346000187201301215, con radicación interna N° 2013-0262
- 9) Certificados de LIBERTAD, expedidos por el INPEC

10) Copias de la demanda, con los anexos pertinentes, para el archivo de ese Juzgado [u Honorable Corporación], y los traslados correspondientes a la entidad demandada y al señor agente del ministerio público.

#### PRUEBAS:

##### 1. Documentales

a) Las que se acompañan con la demanda, relacionadas en el acápite anexos, y las allegadas con posterioridad.

##### 2. Testimoniales:

a) Se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, al señor JAVIER GIRALDO PALOMINO y la señora FABIOLA SANCHEZ VDA DE GIL., quienes pueden ser presentados por intermedio de este apoderado, para que depongan sobre la afectación familiar a que se vieron sometidas las demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad.

3. Las que el señor Juez considere procedentes para un mejor proveer.

#### COMPETENCIA Y CUANTÍA:

Es competencia de este Juzgado, en primera instancia, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde se produjeron los hechos, y por la cuantía que se deriva de aquélla, la cual se determina de la siguiente manera:

Estimación razonada

##### 1. PERJUICIOS MATERIALES

###### DAÑO EMERGENTE:

Honorarios de Abogados por la defensa en materia penal **\$3.000.000.00** (TRES MILLONES DE PESOS)

**LUCRO CESANTE:** Este rubro de la indemnización que corresponde a los dineros que dejó de devengar por los 3 meses, y en donde estaba devengando el salario mínimo que correspondían a los quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos (\$589.500.00), liquidados entonces sumarian **\$ 1.768,500.00** (UN MILLON SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS)

##### 2. PERJUICIOS MORALES:

a) Por el sufrimiento causado con la privación injusta de la libertad de mi poderdante MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, lo **que le causó**

**vergüenza, dolor y humillación ante su familia y vecinos cuando se vio sometida de manera injusta y arbitraria por parte de funcionarios de la Fiscalía 15 Seccional de Tulua Valle, los cuales corresponden a (100) Smlv, lo que equivaldría a \$64.435,000.00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS)**

Sumados todos estos valores dan un total de **\$ 69.203.500, 00 Mcte.** (SESENTAY NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS)

DERECHO:

Todas las normas citadas, así mismo los artículos 130 de la ley 1437 de 2011, y las demás concordantes

•

NOTIFICACIONES:

**PARTE DEMANDANTE:** Mis poderdantes puede ser notificadas así: Sra. MARIA RUTH GIRALDO VALENCIA, Teléfono: 3182902565, Dirección: Carrera 26 N° 17 – 53 Tulua Valle, Barrio La Trinidad.

• **PARTES DEMANDADAS:**

- a. FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre), Conmutador 57(1)5702000, 4149000;  
Email: **jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co.**
- b. DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA:  
Calle 72 No. 7-96, Bogotá. Teléfonos 3127011; [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)
- c. APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO GIL SANCHEZ: En la Calle 19 No 13-195, casa 30 Conjunto Fénix, Barrio Calambeo, Ibagué- Tolima, celular N° 3183305318; 3004727824

**Email:**gustavogil\_abogado@hotmail.com

Para los efectos del artículo 303 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), notifíquese al señor agente del ministerio público.

.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO GIL SÁNCHEZ  
CC. No. 16´356.584 (Tuluá- Valle)  
TP. No. 174160 C.S. De la J



